Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a dos de abril de dos mil veinticinco.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión número **01325/INFOEM/IP/RR/2025**, interpuesto por un particular que al momento de ingresar la solicitud de información e interponer el recurso de revisión, no señaló nombre o seudónimo con el cual desee ser identificado,en lo sucesivo **El Recurrente**, en contra de la respuesta del **Ayuntamiento de Toluca**,en lo subsecuente **El Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO. De la solicitud de información.**

En fecha veintiuno de enero de dos mil veinticinco, el **Recurrente**, presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número de expediente **00424/TOLUCA/IP/2025**, mediante la cual solicitó lo siguiente:

*“Buenas tardes, por medio del presente y con fundamento en el artículo 6º y 8º Constitucional solicito me proporcione la siguiente información usted Presidente Municipal Ricardo Moreno Bastida Cuánto ha gastado en publicidad o en la contratación de difusión de sus temas de su competencia en los años fiscales 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. A. Me informe cuales son sus actividades con forme a los lineamientos legales establecidos y cuales desarrolla, también qué comisión preside o en cual participa. B. Me entregue en medio digital copia de los proyectos o iniciativas que ha realizado o propuesto en cabildo en toda esta administración 2022-2024. C. Me entregue en medio digital copia de los proyectos o iniciativas que ha realizado o propuesto en cabildo en toda esta administración 2025 D. Me informe y me sustente sus logros más relevantes en la presente administración. E. Me detalle cuanto tiempo destina a sus redes sociales dentro de su jornada laboral diaria. F. Me defina las actividades de cada uno de los servidores públicos asignados a la Décima Regiduría. G. Me informe y me entregue en medio electrónico copia de los gastos que ha comprobado en el periodo comprendido de la presente administración. H. Me informe si la pintura, brocha o rodillo con la que se encontraba pintando los compro de su salario o del presupuesto asignado a la Regiduría, por lo que solicito ticket de compra o factura de los mismos I. Me proporcione en formato digital copia de todas y cada una de las imágenes que mostro el día 10 de agosto del presente año en la sesión de cabildo. J. Me proporcione su receta medica o dictamen médico que muestre las lesiones que le obligaron a portar el collarín que trae en el cuello. K. Me de el fundamento legal para que pueda abandonar las sesiones de cabildo, ya que al ser un representante de la sociedad esta para representarnos. L. Me informe el número exacto de cuantas son las veces que en las sesiones de cabildo se ha salido por rabietas o infantil o prepotencia o incapacidad, ya que a un trabajador que dice usted representar esto le costaría su trabajo por abandono del mismo según la legislación vigente.” (Sic).*

**MODALIDAD DE ENTREGA:** A través del **SAIMEX**.

**SEGUNDO. De la respuesta del Sujeto Obligado.**

En el expediente electrónico **SAIMEX**, se aprecia que **El Sujeto Obligado** fue omiso en dar respuesta a las solicitudes de información presentadas por **El Recurrente**.Derivado de lo anterior, se constituye la figura de la ***Negativa Ficta***, cuya esencia consiste en atribuir un efecto negativo de la autoridad administrativa frente a las instancias y solicitudes que hagan los particulares.

**TERCERO. Del recurso de revisión.**

Inconforme con la respuesta por parte del **Sujeto Obligado**, el ahora **Recurrente** interpuso el presente recurso de revisión en fecha trece de febrero de dos mil veinticinco, el cual fue registradoen el sistema electrónico con el expediente número **01325/INFOEM/IP/RR/2025**, en el cual aduce, las siguientes manifestaciones:

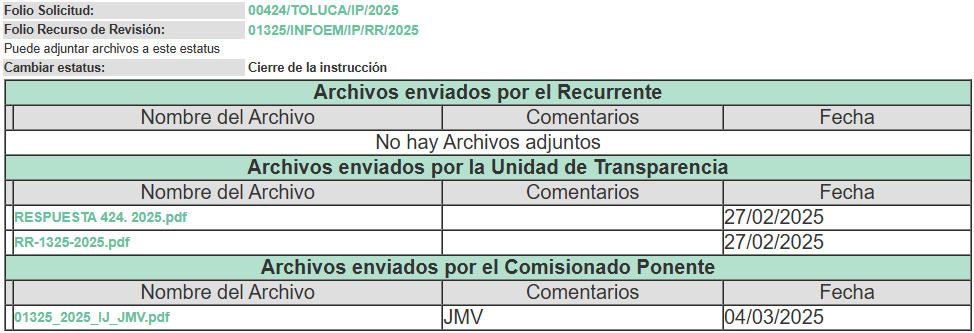
1. **Acto Impugnado:** *“No me dieron contención” (Sic).*
2. **Razones o Motivos de Inconformidad**: *“Sigo esperando la respuesta” (Sic)*

**CUARTO. Del turno del recurso de revisión.**

Medio de impugnación que le fue turnado al Comisionado Presidente **José Martínez Vilchis**, por medio del sistema electrónico, en términos del arábigo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, del cual recayó acuerdo de admisión en fecha dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, determinándose en él, un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos del numeral ya citado.

**QUINTO. De la etapa de manifestaciones y/o alegatos.**

Así, una vez transcurrido el término legal referido, se aprecia que en fecha veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, **El Sujeto Obligado** remitió su informe justificado mediante los archivos electrónicos denominados *“RESPUESTA 424. 2025.pdf”* y *“RR-1325-2025.pdf”*; mismos que se pusieron a la vista del particular mediante el Acuerdo de fecha cuatro de marzo del año en curso; asimismo, se aprecia que la parte **Recurrente**, no presentó alegatos, pruebas o manifestaciones, de conformidad con las siguientes capturas de pantalla:



**SEXTO. Del cierre de instrucción.**

Así, una vez transcurrido el término legal, permitió decretarse el cierre de instrucción en fecha diez de marzo de dos mil veinticinco, en términos del artículo 185, Fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, párrafos trigésimo séptimo, trigésimo octavo y trigésimo noveno fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; ordinal 2, fracción II, 13, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. De los alcances del Recurso de Revisión.**

Anterior a todo debe destacarse que el recurso de revisión tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente y será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

**TERCERO. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.**

Aunado a los anterior tenemos algunas cuestiones de previo y especial pronunciamiento, antes de entrar al estudio del fondo del asunto y es necesario referir, que si bien el recurso de mérito es procedente al haber sido admitido como ha quedado descrito en el apartado de antecedentes, no menos cierto es que en el acuerdo de admisión no se hace mención al nombre del **Recurrente,** por lo que en este punto se tiene por satisfecho, ya que el artículo 180, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios último párrafo, prevé que no es requisito indispensable contener el nombre cuando se hace la impugnación de manera electrónica, ello porque no se advierte nombre en específico, del cual no se colige que corresponda al nombre de una persona.

Esta Ponencia considera importante abordar el análisis de los requisitos de procedibilidad de los recursos de revisión, así el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece lo siguiente:

*“****Artículo 180.*** *El recurso de revisión contendrá:*

***I.*** *El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;*

***II. El nombre del solicitante que recurre*** *o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;*

En principio, de una interpretación del artículo transcrito se observan los requisitos que deberán contener los recursos de revisión; sobre el particular, de la revisión del expediente electrónico del **SAIMEX** se desprende que el solicitante y ahora **Recurrente**, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, no proporcionó un nombre para que sea identificado; por lo que no tiene certeza sobre su identidad, lo que en estricto sentido, no se colmarían los requisitos establecidos en el citado artículo 180, de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, debe destacarse que el artículo 15, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé que, toda persona tendrá acceso a la información sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, de lo que se infiere que para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el nombre no es un requisito *sine qua non* que los particulares y, en su caso, los recurrentes deban señalar, por el contrario la Ley de Transparencia prevé en su artículo 155, párrafo segundo la posibilidad de que las solicitudes de información sean anónimas, con nombre incompleto o seudónimo.

Por lo que el derecho humano de acceso a la información pública se reitera que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que inclusive, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.

**CUARTO. Del estudio de las causas de improcedencia.**

El estudio de las causas de improcedencia que se hagan valer por las partes o que se advierta de oficio por este Resolutor debe ser objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto ya que el estudio de los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso genera eficacia jurídica de las resoluciones, más aún que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia la cual impide su estudio y resolución cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseer el recurso de revisión sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines[[1]](#footnote-1).

Por lo que una vez que se analizó el expediente en estudio se cae en la cuenta de que no se actualiza ninguna de las casuales a continuación transcritas:

*“****Artículo 191.*** *El recurso será desechado por improcedente cuando:*

*I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley, a partir de la respuesta;*

*II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial de la Federación algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;*

*III. No actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;*

*IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley;*

*V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;*

*VI. Se trate de una consulta, o trámite en específico; y*

*VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.”*

Ya que no fue interpuesto de forma extemporánea, no se está tramitando ante el Poder Judicial Federal, no es una consulta, o trámite en específico, ni tampoco se advierte que el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, por lo que al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio, este Órgano Garante de la Transparencia se avoca al análisis del fondo del asunto que nos ocupa.

Así las cosas, al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio por este Resolutor, se procede al análisis del fondo de los asuntos en los siguientes términos.

**QUINTO. Del estudio y resolución del asunto.**

Antes del entrar al estudio, cabe precisar que **El Sujeto Obligado** no realizó pronunciamiento alguno, pues no se debe perder de vista que el objeto del presente fallo nace a la vida jurídica en el momento en el que el particular reviste la figura de Recurrente interponiendo dicho medio de impugnación, el cual tiene como motivo de inconformidad la omisión de la autoridad en dar respuesta a su solicitud, en consecuencia se actualizándose las hipótesis, señaladas en las fracciones I y VII, del artículo 179, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,resultando procedente la interposición del recurso de revisión cuando no se dé respuesta a una solicitud de información.

Así las cosas, ante la omisión del **Sujeto Obligado** para dar respuesta al **Recurrente**, se advierte lo que en la doctrina se le conoce como ***negativa ficta***, figura jurídica cuya esencia consiste en atribuir un efecto negativo al silencio de la autoridad administrativa frente a las instancias y solicitudes que hagan los particulares.

En este sentido la *negativa ficta* constituye una presunción legal, en el entendido de que donde no hubo respuesta por parte del Sujeto Obligadoexiste, una resolución de rechazo ante la solicitud del ciudadano; ya que efectivamente, dicha figura se encuentra íntimamente vinculada con el Derecho al Acceso de Información, consagrado en nuestra Carta Magna, es por ello que constituye un instrumento que garantiza la posibilidad de defensa del particular en contra de la incertidumbre jurídica y que tiende a realizar ese *Estado de Derecho* en el que, el particular, tiene siempre una vía de defensa.

En este sentido en el marco del derecho de acceso a la información pública, la figura de la *negativa ficta* brinda al ciudadano la oportunidad de inconformarse en los casos en que estime violentado su derecho; en consecuencia, resulta indispensable subrayar que el derecho de acceso a la información pública, implica que cualquier persona conozca la información contenida en los documentos que se encuentren en los archivos de los Sujetos Obligados, conforme a los artículos 4, 12, 24, último párrafo y 160, de la Ley local en la materia, que a la letra citan:

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.*

*(…)*

***Artículo 24.***

*(…)*

*Los sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones.”*

*(…)*

***Artículo 160.*** *Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.*

*En caso que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.*

Así que la obligación de los Sujetos Obligados de dar acceso a la información pública que generen, administren o posean, se tendrá por cumplida cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, o cuando realice la consulta de la misma en el lugar que ésta se localice, de acuerdo a lo señalado por el artículo 166, de la Ley local en la materia, que se reproduce de la siguiente forma:

***Artículo 166.*** *La obligación de acceso a la información pública se tendrá por cumplida cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, o cuando realice la consulta de la misma en el lugar en el que ésta se localice.*

De lo anterior, conforme a las acciones del Sujeto Obligado, se establece que éste vulnera el derecho de acceso a la información pública del Recurrente, toda vez que no entrega respuesta a la solicitud de información presentada, de conformidad a lo establecido en los artículos 24 fracción XI, y 166, de la ley local en la materia, y que señalan:

***Artículo 24.*** *Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:*

*(...)*

***XI.*** *Dar acceso a la información pública que le sea requerida, en los términos de la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;*

El análisis del presente recurso, se basará en el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y respetando en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el párrafo tercero del artículo 1, de la Constitución Federal y el diverso 8, de la Ley de Transparencia local.

En este tenor, de forma objetiva al desentrañar la solicitud de información, podemos identificar que **El Recurrente** peticiona el o los documentos, donde conste lo subsecuente:

**Del Presidente Municipal Ricardo Moreno Bastida.**

1. ¿Cuánto ha gastado en publicidad o en la contratación de difusión de sus temas de su competencia en los años fiscales 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018?
2. ¿Cuáles son sus actividades con forme a los lineamientos legales establecidos y cuales desarrolla?
3. ¿Qué comisión preside o en cual participa?
4. Copia de los proyectos o iniciativas que ha realizado o propuesto en cabildo en toda esta administración 2022-2024.
5. Copia de los proyectos o iniciativas que ha realizado o propuesto en cabildo en toda esta administración 2025.
6. Informe y sustente sus logros más relevantes en la presente administración.
7. ¿Cuánto tiempo destina a sus redes sociales dentro de su jornada laboral diaria?
8. Defina las actividades de cada uno de los servidores públicos asignados a la Décima Regiduría.
9. Copia de los gastos que ha comprobado en el periodo comprendido de la presente administración.
10. Se informe si la pintura, brocha o rodillo con la que se encontraba pintando los compro de su salario o del presupuesto asignado a la Regiduría, por lo que solicito ticket de compra o factura de los mismos.
11. Copia de todas y cada una de las imágenes que mostró el día 10 de agosto del presente año en la sesión de cabildo.
12. Me proporcione su receta médica o dictamen médico que muestre las lesiones que le obligaron a portar el collarín que trae en el cuello.
13. El fundamento legal para que pueda abandonar las sesiones de cabildo, ya que al ser un representante de la sociedad esta para representarnos.
14. El número exacto de cuántas son las veces que en las sesiones de cabildo se ha salido por rabietas o infantil o prepotencia o incapacidad, ya que a un trabajador que dice usted representar esto le costaría su trabajo por abandono del mismo según la legislación vigente.

Ahora bien, en dicha solicitud se observa en primer lugar que la información fue formulada parcialmente a través de planteamientos en donde no se identifica un documento en específico, en segundo lugar, se aprecia que en la misma se vierten manifestaciones subjetivas que no pueden ser atendidas mediante el Derecho de Acceso a la Información.

Por otra parte, al referirnos al acto impugnado por **El Recurrente,** concatenado con los motivos o razones de inconformidad emitidos, se distingue que se adolece, de forma toral, de la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, actualizando con ello lo establecido en la fracción VII, del artículo 179, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual a la letra reza:

***“Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***(…****)*

***VII.*** *La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información*

***(…)”******[Sic]***

Dicho lo anterior, considerando la información requerida por **El Recurrente** en su solicitud de información, y ante la falta de respuesta, se establece que la materia de estudio se centrará en las atribuciones del **Sujeto Obligado,** a efecto de determinar si éste genera, posee o administra dicha información.

Una vez establecida y delimitada la materia del presente recurso de revisión, y atentos a la falta de respuesta del **Sujeto Obligado** a la solicitud de información, la cual se traduce en el hecho de ser omiso en dar atención a la petición en términos de la Ley de la materia, es decir, incumplir con las obligaciones que dicho cuerpo legal le impone como **Sujeto Obligado** de la misma, tal y como lo constituyen los artículos, 7 y 23, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establecen como deber de los sujetos obligados el hacer pública toda la información en su posesión, como se aprecia a continuación:

*“****Artículo 7. El Estado de México garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad,*** *autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato* ***que reciba y ejerza recursos públicos*** *o realice actos de autoridad en el ámbito de competencia del Estado de México y sus municipios.*

***Artículo 23****. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:*

*(…)*

***IV. Los ayuntamientos y las dependencias, organismos, órganos y entidades de la administración municipal****;*

Resulta necesario señalar que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México, por lo que el **Sujeto Obligado** debe ser cuidadoso del debido cumplimiento de las obligaciones constitucionales que se le imponen, en consecuencia, a todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, según lo dispone el tercer párrafo del artículo primero de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** al señalar la obligación de “promover, **respetar**, **proteger** y **garantizar** los derechos humanos”, entre los cuales se encuentra dicho derecho.

El acceso a la información pública es el derecho humano a través del cual se puede solicitar aquellos documentos que generen, administren o posean las autoridades en ejercicio de sus respectivas atribuciones y competencia.

Este Órgano Garante en aras de promover y garantizar la debida tutela del derecho humano de acceso a la información pública, destaca la obligación del Estado, a través de sus diversas autoridades, de preservar sus documentos en archivos administrativos y actualizados, supuesto indispensable para hacerlos del conocimiento de los particulares que requieren conocer la información contenida en estos.

De acuerdo a la Ley en la materia en términos generales, establece que como uno de los objetivos con el que cuenta es el de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública, mediante los procedimientos establecidos de forma sencilla, expeditos, oportunos y gratuitos, y con ello contribuir a la mejora de procedimientos y mecanismos que permitan trasparentar la gestión pública y mejora la toma decisiones, a través de la difusión de la información que obra en poder de los Sujeto Obligados.

En virtud de ello, en cuanto al derecho humano de acceso a la información pública la información en posesión de las autoridades municipales es pública. Aunado a ello como ha quedado señalado los Organismos Públicos Descentralizados de los Municipios, son considerados Sujetos Obligados para efectos de transparentar y permitir el acceso a la información pública que posean, y están obligados a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. En ese sentido, debe privilegiarse en todo momento el principio de máxima publicidad.

Por lo que en cumplimiento a las obligaciones que establece nuestra Carta Magna, la Constitución Estatal y la Ley de la materia le imponen, el **Sujeto Obligado** está constreñido a dar atención a las solicitudes de información que a través del SAIMEX o de vía directa le sean presentadas en ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, lo cual, en el caso no aconteció, pues tal y como se ha acreditado de la revisión del expediente electrónico formado de las constancias que obran en el sistema SAIMEX por motivo de la solicitud que dio origen a este recurso, el **Sujeto Obligado** fue omiso en dar respuesta a la solicitud.

De tal manera que la omisión del Titular de la Unidad de Transparencia, como primer responsable de ello de acuerdo de lo dispuesto por el artículo 53, fracción II, de la Ley de la materia, a atender la solicitud de información, se traduce en una conducta que ha vulnerado el derecho de acceso a la información consignado a favor del particular.

No sobra decir que, al actuar de esta forma, el Sujeto Obligado incumple con el primer mandato contenido en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el deber de todas las autoridades, *en el ámbito de sus atribuciones, de promover, respetar, proteger y* ***garantizar*** *los derechos humanos.*

En este contexto, debe considerarse que según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el *procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del derecho en cuestión.* Por lo tanto, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información constituye un incumplimiento del Sujeto Obligado a su deber de garantizar el derecho, lo que constituye una vulneración al mismo y resulta, totalmente aplicable, el último mandato del mismo párrafo del artículo constitucional antes citado que establece la obligación del Estado Mexicano, de *investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.*

Por lo que, en cumplimiento a esta resolución, el **Sujeto Obligado** deberá dar atención a la solicitud de información, puesto que el silencio administrativo que hizo patente al omitir dar respuesta trae como consecuencia que se le ordene dar atención a la solicitud entregando la información solicitada, lo cual deberá llevar a cabo en ejercicio de sus atribuciones y con arreglo a lo dispuesto por la ley de la materia.

En consecuencia, para responder a la solicitud de acceso a la información en cuestión el **Sujeto Obligado** deberá de verificar si esta corresponde a una facultad, competencia o función explícita o implícita, y si ésta corresponde al ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, deberá de proceder, según lo establecido en el artículo 162, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, turnando la solicitud a todas las área competentes que cuenten o deban tener la información, con objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

En cualquiera de los casos, imperativamente, el **Sujeto Obligado** debe de responder a la solicitud de acceso a la información pública, ya sea señalando que no cuenta con la información porque esta no corresponde al ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o bien, si la información sí corresponde a cualquiera de éstas, buscando, localizando y entregando la información de manera íntegra, parcial o clasificándola en su totalidad por los supuestos que se señalan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; en su defecto, de no localizar la información que debía tener, procediendo según lo refieren los párrafos segundo o tercero del artículo 19, de la Ley en cita, pero emitiendo una respuesta.

No obstante, el **Sujeto Obligado** en la etapa de manifestaciones, remitió los archivos electrónicos denominados *“RESPUESTA 424. 2025.pdf”* y *“RR-1325-2025.pdf”*; el Titular de la Unidad de Transparencia, informó lo siguiente:

“…**5.41 Bis del Código Reglamentario de Toluca**, además de lo relativo al Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento y Manual de Procedimientos de la Secretaría del Ayuntamiento; hago de su conocimiento que la **Tesorería Municipal** y Servidor Público Habilitado, **informó que la información solicitada no obra en los archivos de esta unidad administrativa por no encontrarse dentro de la esfera de competencia de la misma**.

No omito mencionar que, respecto de los demás puntos requeridos, la solicitud se deberá de reconducir al área correspondiente, debido a que no forma parte de sus atribuciones.

Por parte de **la Dirección General de Administración** y Servidora Pública Habilitada, **informó que la Dirección de Recursos Materiales después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos y los de sus departamentos, informa que no se localizó contrato referente a** *"...difusión de sus temas de su competencia en los años fiscales 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018..."* (Sic); asimismo se **hace de su conocimiento que la información correspondiente a los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, se encuentra fuera de la competencia de esta Dirección y sus departamentos.**

Por lo que respecta de **la Secretaria del Ayuntamiento** y Servidor Público Habilitado, **informó que se procedió a realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos que obran en la Secretaria del Ayuntamiento, en este sentido y de acuerdo a las facultades, competencias y funciones, se hace del conocimiento que no se cuenta con la expresión documental que de atención a la pretensión del C. Solicitante, en razón de no haberse generado, poseído o administrado dicha información…**.

Asimismo, **la Coordinación de Comunicación Social** y Servidor Público Habilitado, **informó que después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de la Coordinación, no se cuenta con la misma dentro de los registros, lo anterior por no corresponder a sus funciones, atribuciones y/o facultades, el recopilar, controlar y/o archivar dicha información**.” (Sic).

Es importante señalar que, dicha solicitud fue turnada a los Servidores Públicos Habilitado correspondientes; situación, que se advierte de las constancias que obran en el expediente electrónico del **SAIMEX** y, específicamente en el apartado de *Requerimientos*, donde se aprecia que la solicitud de información fue turnada de la siguiente manera:



De lo manifestado por el **Sujeto Obligado** así como de la imagen antes referida, se advierte que el documento al que hace referencia el **Sujeto Obligado** en su informe justificado, consistente en el Acta para solicitar la prórroga para dar atención a la solicitud de información, cuya ubicación se encuentra en el apartado de ***requerimiento***s, por lo que, el documento referido no se encuentra en el apartado correspondiente a la solicitud de prórroga, por tal motivo, se debe aclarar al **Sujeto Obligado** que dicho apartado de requerimientos únicamente es visible para los servidores públicos habilitados a quienes se les haya turnado la solicitud y para el Titular de la Unidad de Transparencia, pues para que sea visualizada por los particulares requiere que la misma sea notificada como respuesta al ciudadano según lo indicado en las guías de uso proporcionadas por este Instituto a los **Sujetos Obligados** para que atiendan cabalmente las solicitudes que les sean formuladas, que en caso específico la guía que se insta a seguir al Ayuntamiento en cuestión, es la denominada *“Seguimiento de Solicitudes”*; la cual, se encuentra a su disposición en la página web del SAIMEX.

Por lo anterior, es de resaltar que la información que argumenta fue entregada a través de los requerimientos no es del conocimiento del particular y por ende no se notificó como una respuesta al ciudadano y no se puede tomar en consideración para efectos de la presente resolución, por ello, los motivos de inconformidad planteados por el **Recurrente** resulten fundados.

Por lo que, de la información remitida por parte del **Sujeto Obligado** a través del informe justificado, se advierte que los Servidores Públicos referidos en la solicitud de información, cuentan con las facultades para emitir diversos documentos en el ejercicio de sus funciones, así como para auxiliarse de los demás unidades administrativas y comisiones establecidas por la Ley.

Bajo esa premisa, resulta necesario iniciar el presente análisis, señalando que, para un mejor entendimiento del presente estudio, se procederá a la división de los siguientes apartados:

| **Solicitud de Información** | **Información remitida Informe Justificado** | **Cumplimiento** |
| --- | --- | --- |
| 1. ¿Cuánto ha gastado en publicidad o en la contratación de difusión de sus temas de su competencia en los años fiscales 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018? | **La Dirección General de Administración** y Servidora Pública Habilitada, **informó que la Dirección de Recursos Materiales después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos y los de sus departamentos, informa que no se localizó contrato referente a** *"...difusión de sus temas de su competencia en los años fiscales 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018..."* (Sic) | **Parcialmente** |
| 2. ¿Cuáles son sus actividades con forme a los lineamientos legales establecidos y cuales desarrolla? | La Tesorería Municipal y Servidor Público Habilitado, informó que la información solicitada no obra en los archivos de esta unidad administrativa por no encontrarse dentro de la esfera de competencia de la misma.  Por lo que respecta de la Secretaria del Ayuntamiento y Servidor Público Habilitado, informó que se procedió a realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos que obran en la Secretaria del Ayuntamiento, en este sentido y de acuerdo a las facultades, competencias y funciones, se hace del conocimiento que no se cuenta con la expresión documental que de atención a la pretensión del C. Solicitante, en razón de no haberse generado, poseído o administrado dicha información….  Asimismo, la Coordinación de Comunicación Social y Servidor Público Habilitado, informó que después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de la Coordinación, no se cuenta con la misma dentro de los registros, lo anterior por no corresponder a sus funciones, atribuciones y/o facultades, el recopilar, controlar y/o archivar dicha información.” (Sic). | **No** |
| 3. ¿Qué comisión preside o en cual participa? | **No** |
| 4. Copia de los proyectos o iniciativas que ha realizado o propuesto en cabildo en toda esta administración 2022-2024. | **No** |
| 5. Copia de los proyectos o iniciativas que ha realizado o propuesto en cabildo en toda esta administración 2025. | **No** |
| 6. Informe y sustente sus logros más relevantes en la presente administración. | **No** |
| 7. ¿Cuánto tiempo destina a sus redes sociales dentro de su jornada laboral diaria? | *No es atendible dicho punto por considerarse como “Derecho de petición”.* |
| 8. Defina las actividades de cada uno de los servidores públicos asignados a la Décima Regiduría. | **No** |
| 9. Copia de los gastos que ha comprobado en el periodo comprendido de la presente administración. | **No** |
| 10. Se informe si la pintura, brocha o rodillo con la que se encontraba pintando los compro de su salario o del presupuesto asignado a la Regiduría, por lo que solicito ticket de compra o factura de los mismos. | *No es atendible dicho punto por considerarse como “Derecho de petición”.* |
| 11. Copia de todas y cada una de las imágenes que mostró el día 10 de agosto del presente año en la sesión de cabildo. | *No es atendible dicho punto por considerarse como “Derecho de petición”.* |
| 12. Me proporcione su receta médica o dictamen médico que muestre las lesiones que le obligaron a portar el collarín que trae en el cuello. | *No es atendible dicho punto por considerarse como “Derecho de petición”.* |
| 13. El fundamento legal para que pueda abandonar las sesiones de cabildo, ya que al ser un representante de la sociedad esta para representarnos. | *No es atendible dicho punto por considerarse como “Derecho de petición”.* |
| 14. El número exacto de cuántas son las veces que en las sesiones de cabildo se ha salido por rabietas o infantil o prepotencia o incapacidad, ya que a un trabajador que dice usted representar esto le costaría su trabajo por abandono del mismo según la legislación vigente. | *No es atendible dicho punto por considerarse como “Derecho de petición”.* |

Al respecto, recordemos que, en líneas anteriores, se indicó que la presente solicitud de información había sido a través de planteamientos en donde no se identifica un documento en específico, en las que en la misma se vierten manifestaciones subjetivas que no pueden ser atendidas mediante el Derecho de Acceso a la Información.

Bajo éste tenor cabe aclarar que cuando los planteamientos que formulen los particulares se pueda colmar con la entrega de documentos que los Sujetos Obligados generen, posean o administren en ejercicio de sus atribuciones, se está en presencia del derecho fundamental de acceso a la información, previsto en el artículo 6, Apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual deberá garantizarse ordenando la entrega de tales documentales, siempre y cuando éstas sean de acceso público.

Sirve de sustento a lo anterior, el Criterio 028-10 emitido por el Pleno del entonces llamado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que establece que se deberá garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboraciónaunque el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentación, **El Sujeto Obligado** deberá hacer entrega del mismo al solicitante mismo que a continuación se cita:

***“Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en específico, si ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el documento en específico.*** *La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentación específica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante.”*

Así que, hay que hacer un énfasis en que son solicitudes que deben señalarse*,* no constituyen un derecho de acceso a la información pública y por lo tanto **no es atendible mediante una solicitud de Acceso a la Información**, porque se tratan de manifestaciones subjetivas vertidas por el particular, **interrogantes** y declaraciones que no se colman con la entrega de documentos, situación que conlleva a afirmar que se está en presencia del ejercicio del **DERECHO DE PETICIÓN**.

Por lo que la entrega de una razón o un razonamiento por parte del **Sujeto Obligado** no es algo que la ley establezca como atribución, derecho, o facultad; pues ello implicaría un juicio de valor referente a **un cuestionamiento** realizado, los cuales, **al constituir interrogantes**, **inquietudes** y manifestaciones se satisfacen vía derecho de petición.

Asimismo, se puede advertir que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se centra en la potestad de los particulares para conocer el contenido de los documentos que obren en los archivos de los Sujetos Obligados, ya sea porque los generen, administren o simplemente los posean en el ejercicio de sus atribuciones.

Para ello, la Ley de la materia otorga la calidad de documento a los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, **cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados**, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.

De lo anterior, se puede concluir que la distinción entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información pública estriba principalmente en que en el primero de ellos, la pretensión del peticionario consiste generalmente en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, mientras que en el segundo supuesto **la solicitud de acceso a la información pública se encamina primordialmente a permitir el acceso a datos, registros y todo tipo de información pública que conste en documentos, sea generada o se encuentre en posesión de la autoridad.**

Sobre el particular, cabe traer a colación los artículos 2°, fracción II; 3°, fracción XI y 18, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; los cuales disponen lo siguiente:

* Que uno de los objetivos de la Ley es proveer lo necesario para garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública;
* Que los documentos son los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier registro que documente el ejercicio de facultades, funciones y competencia de los Sujetos Obligados, sin importar su fuente y fecha de elaboración y, por último, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generan. En este orden de ideas, puede concluirse que la Ley en cita, es una ley de acceso a documentos.

Por lo que, la entrega de una razón o un razonamiento por parte del **Sujeto Obligado** no es algo que la ley establezca como atribución, derecho, o facultad; pues ello implicaría **un juicio de valor** referente a un cuestionamiento realizado, los cuales, al constituir interrogantes, inquietudes y manifestaciones se satisfacen vía derecho de petición, y no así, a través del ejercicio del derecho a acceder a información pública.

Entonces, al tratarse de un derecho de petición estamos en presencia de una consulta que se aleja del derecho de acceso a la información pública, bajo esas consideraciones, se afirma que en el recurso de revisión sujeto a estudio se actualiza la hipótesis jurídica citada, toda vez que quedó probado que la solicitud de acceso a la información que promovió la parte **Recurrente** corresponde al ejercicio de un derecho de petición y no al derecho de acceso a la información pública.

En primera instancia es de señalar que en lo tocante al punto “*11. En formato digital copia de todas y cada una de las imágenes que mostro el día 10 de agosto del presente año en la sesión de cabildo.*”, del análisis a este requerimiento, se observa que el particular **requiere información relativa a imágenes mostradas en una sesión de cabildo que a la fecha de solicitud no se ha materializado, toda vez que el elemento temporal que señala es el 10 de agosto del presente año, es decir, de dos mil veinticinco,** **por lo que es dable señalar que indudablemente nos encontramos ante un hecho futuro e incierto**, los cuales no se pueden determinar ya que están supeditados a la conclusión de los mismos; por lo que no es procedente que los Sujetos Obligados proporcionen dicha información.

Lo anterior se robustece con la Tesis Aislada con número de registro 209001, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito que a la letra señala:

***“ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS.*** *Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías.”*

En ese sentido, no es procedente la exigencia de la parte **Recurrente** de que el **Sujeto Obligado** atienda su solicitud en los términos solicitados, pues dicha autoridad únicamente está constreñida a proporcionar la información pública que genere en uso de sus atribuciones de derecho público con anterioridad a la fecha de la solicitud de información, esto es al **veintiuno de enero de dos mil veinticinco**, por lo tanto, la entrega de algún documento para satisfacer este punto no es procedente.

Por otro lado, respecto al punto consistente en *“12. Su receta médica o dictamen médico que muestre las lesiones que le obligaron a portar el collarín que trae en el cuello.”,* es necesario resaltar que este Organismo Garante no tiene certeza de que dicho acontecimiento haya ocurrido, **por lo que es de señalar que nos encontramos ante un hecho incierto**, por lo que, el **Sujeto Obligado** cuente con la información solicitada por el particular, por lo tanto, no procede su entrega, sin embargo, resulta pertinente hacer del conocimiento del particular que está solicitando un soporte documental que da cuenta del estado de salud de una persona, lo cual concierne a su vida íntima y privada; lo anterior encuentra sustento en lo establecido en el artículo 4°, fracción XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, el cual establece que los datos personales sensibles, son aquellos cuya utilización indebida, puedan dar origen a discriminación o conlleven a un riesgo grave para éste, entre los cuales se encuentran los que den cuenta del estado de salud, ya sea físico o mental.

De tales circunstancias, se considera que si bien en el caso particular no se le hará entrega de documento alguno al no obrar la fuente obligacional para ordenar dicho soporte, no menos cierto es que resulta de vital importancia hacer del conocimiento del particular que toda documentación que dé cuenta del estado de salud físico y mental de una persona, guarda el carácter de confidencial, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Bajo otro orden de ideas, la información solicitada en los puntos identificados con los numerales 7, 13 y 14 por la ahora parte **Recurrente** consistentes en *7. Cuanto tiempo destina a sus redes sociales dentro de su jornada laboral diaria, 13. Fundamento legal para que pueda abandonar las sesiones de cabildo, ya que al ser un representante de la sociedad está para representarnos y 14. Número exacto de cuantas son las veces que en las sesiones de cabildo se ha salido por rabietas o infantil o prepotencia o incapacidad,* los cuales son tendientes a obtener diversos pronunciamientos específicos respecto a una situación en Particular, de servidores públicos determinados, situación por la cual nos lleva a recordar que el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que los sujetos obligados únicamente están constreñidos a entregar los documentos que obren en sus archivos en el estado en que estos se encuentren, lo que no comprende entregar la información conforme al interés del solicitante.

Robustece lo anterior, el Criterio 03/17 emitido por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual establece lo siguiente:

***No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.*

Por otro lado, es importante mencionar que el requerimiento del Particular es tendiente a obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, lo cual no es factible atenderse vía acceso a la información pública, toda vez, que la atención a dicho requerimiento no se pueden colmar con documentos que obren en los archivos del **Sujeto Obligado**, ya que no se encontró fuente obligacional que establezca que la Titular de la Unidad de Transparencia deba generar, poseer o administrar un documento en el que conste el pronunciamiento solicitado por el particular.

Por ello, en virtud de los argumentos expuestos con anterioridad, así como del análisis realizado a las constancias que obran en el expediente electrónico del **SAIMEX**, se determina que no es procedente la atención de estos puntos de la solicitud mediante el derecho de acceso a la información, por lo que no se ordena entrega de documento alguno.

Ahora bien, respecto de los puntos que sí son atendibles, tenemos que, tocante al **numeral 1)**, *¿Cuánto ha gastado en publicidad o en la contratación de difusión de sus temas de su competencia en los años fiscales 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018?* El **Sujeto Obligado** a través de la **Dirección General de Administración** y Servidora Pública Habilitada, **informó que** **la Dirección de Recursos Materiales después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos y los de sus departamentos, informa que no se localizó contrato referente a dicho concepto.**

Así que, nos encontramos ante la presencia de un hecho negativo, en virtud de que la información solicitada no puede fácticamente obrar en los archivos del **Sujeto Obligado**, ya que no puede probarse por ser lógica y materialmente imposible.

Asimismo, no se trata de un caso por el cual la negación del hecho implique la afirmación del mismo, simplemente se está ante una notoria y evidente inexistencia de la información solicitada. En este contexto, nos encontramos ante la presencia de un ***hecho negativo***, en virtud de que la información solicitada no puede fácticamente obrar en los archivos del **Sujeto Obligado**, ya que no puede probarse por ser lógica y materialmente imposible.

Es conveniente, invocar la tesis con número de registro 267287, de la Sexta Época, Instancia: Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LII, Tercera Parte, Materia Común, que indica lo siguiente:

*“****HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACION****. Tratándose de un hecho negativo, el Juez no tiene por qué invocar prueba alguna de la que se desprenda, ya que es bien sabido que esta clase de hechos no son susceptibles de demostración.” (Sic)*

Ahora bien, de conformidad con el Código Reglamentario Municipal de Toluca, la Dirección de Recursos Materiales, cuenta con las siguientes atribuciones:

***DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES***

***Artículo 3.43.*** *La o el titular de la Dirección de Recursos Materiales cuenta con las siguientes atribuciones:*

*I. Llevar a cabo los procedimientos para la adquisición de los bienes y servicios y el arrendamiento, adquisición y enajenación de inmuebles en estricto apego a las disposiciones legales aplicables;*

*II. Autorizar y suscribir los pedidos-contrato que se finquen relativos a procedimientos de adquisiciones y compras de bienes, materiales y suministros;*

*III. Elaborar los contratos de adquisición de los bienes y servicios y de arrendamiento, adquisición y enajenación de inmuebles de competencia municipal;*

*IV. Someter a consideración la autorización de prórroga para la entrega de bienes y servicios que sean solicitados por los proveedores o prestadores de servicios, de acuerdo a lo establecido en la normatividad establecida;*

*V. Mantener actualizado el padrón de proveedores; tomando en consideración, el tipo de bien y servicio que ofrece cada proveedor, este deberá cubrir los documentos y requisitos que establece la normatividad respectiva;*

*VI. Solicitar las cotizaciones necesarias para realizar los precios de referencia y estudios de mercado, conforme la normatividad respectiva;*

*VII. Llevar a cabo los trámites administrativos respectivos para la integración de los comités de adquisiciones y servicios, y arrendamientos, y adquisición y enajenación de bienes inmuebles, así mismo, deberá integrar los expedientes los temas a tratar por parte de cada comité;*

*VIII. Aplicar las penas convencionales a aquellos proveedores que incumplan en cuanto a las fechas establecidas en los contratos de aquellos materiales, bienes y suministros que les fueron adjudicados, conforme a lo que establece la normatividad correspondiente;*

*IX. Controlar y vigilar el manejo y operación del almacén municipal, estableciendo un sistema estricto de recepción, resguardo y entrega de materiales, bienes y suministros, así como implementar periódicamente la elaboración de inventarios;*

*X. Integrar y elaborar el sistema anual de adquisiciones de bienes y servicios calendarizado, con base en los montos por partida, objeto de gasto del presupuesto y establecer el procedimiento para su ejecución, previa autorización de los comités de adquisiciones y servicios y de arrendamientos, adquisición y enajenación de inmuebles;*

*XI. Derogada;*

*XII. Derogada;*

*XIII. Realizar los trámites que procedan con la finalidad de contratar el aseguramiento*

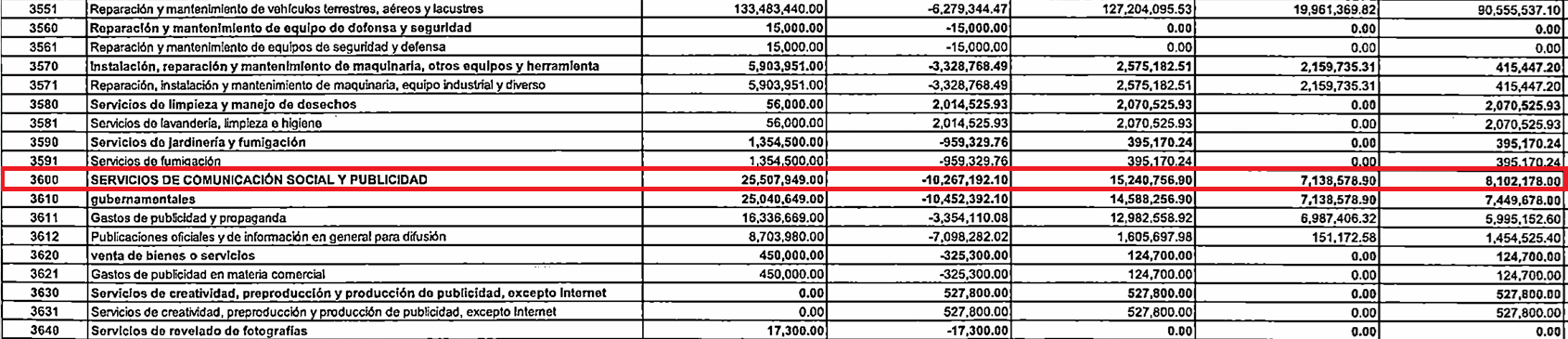
*del parque vehicular y equipo especial de las unidades que se encuentren activas y en funcionamiento, para lo cual, deberá contarse con un padrón vehicular actualizado; y*

*XIV. Las demás que le asignen otros ordenamientos, el presidente municipal y la o el*

*Director General de Administración.*

Así, se puede colegir que, la unidad administrativa competente, indicó que, no localizó contrato referente a dicho concepto, recordando que, los Sujetos Obligados tienen la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

No obstante, este Órgano Garante, encontró en la página[[2]](#footnote-2) oficial del **Sujeto Obligado**, la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023, gastos erogados por el concepto requerido por el particular, lo anterior de conformidad con la siguiente captura de pantalla:



Visto lo anterior, es dable realizar una nueva búsqueda de la información y hacer entrega de los documentos donde conste la cantidad gastada en publicidad o contratación de difusión de temas de competencia de la Presidencia Municipal de Toluca, del 01 de enero del 2018 al 21 de enero de 2025.

Bajo otro orden de ideas, se procede a analizar la naturaleza de la información solicitada que es la concerniente a los soportes documentales en los que conste la erogación de recursos, para ello es necesario referir que los artículos 342, 343, 344 y 345 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, disponen el sistema y las políticas que deben seguirse para llevar el registro contable y presupuestal de las operaciones financieras, en los siguientes términos:

*“****Artículo 342.-*** *El registro contable del efecto patrimonial y presupuestal de las operaciones financieras, se realizará conforme al sistema y a las disposiciones que se aprueben en materia de planeación, programación, presupuestación, evaluación y contabilidad gubernamental.*

*En el caso de los municipios, el registro a que se refiere el párrafo anterior, se realizará conforme al sistema y a las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, evaluación y contabilidad gubernamental, que se aprueben en el marco del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México.*

***Artículo 343.-*** *- El sistema de contabilidad debe diseñarse sobre base acumulativa total y operarse en forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, egresos y, en general, que posibilite medir la eficacia del gasto público, y contener las medidas de control interno que permitan verificar el registro de la totalidad de las operaciones financieras.*

*El sistema de contabilidad sobre base acumulativa total, se sustentará en las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.*

***Artículo 344.- Los Entes Públicos, a través de cualquiera de sus unidades administrativas, de acuerdo con su naturaleza jurídica y según corresponda, registrarán contablemente el efecto patrimonial y presupuestal de las operaciones financieras que realicen, en el momento en que ocurran, con base en el sistema y políticas de registro establecidas, en el caso de los Municipios, se hará por la Tesorería.***

***Todo registro contable y presupuestal deberá estar soportado con los documentos comprobatorios originales o en medios electrónicos, los que deberán permanecer en custodia y conservación de los Entes Públicos a través de las unidades administrativas que ejercieron el gasto y a disposición de los Órganos de Fiscalización locales y federales,*** *según corresponda, así como de los órganos internos de control, por un término de cinco años, contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda,* ***en el caso de los Municipios, dicha obligación corresponderá a la Tesorería.***

*Tratándose de documentos de carácter histórico, se estará a lo dispuesto por la legislación de la materia.*

*…*

***Artículo 345.-******Las Dependencias y sus unidades administrativas; deberán conservar la documentación contable del año en curso y la de ejercicios anteriores, cuyas cuentas públicas hayan sido revisadas y fiscalizadas y la remitirán al Archivo Contable Gubernamental en un plazo que no excederá de seis meses. Tratándose de los comprobantes fiscales digitales, estos deberán estar agregados en forma electrónica a cada póliza de*** *registro contable.*

*Los poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos y las Entidades Públicas, de acuerdo con su naturaleza jurídica y según corresponda, deberán conservar la documentación contable del año en curso y la de ejercicios anteriores, cuyas cuentas públicas hayan sido revisadas y fiscalizadas, en sus propios Archivos Contables. Tratándose de los comprobantes fiscales digitales, estos deberán estar agregados en forma electrónica a cada póliza de registro contable.*

*El plazo señalado en este artículo empezará a contar a partir de la publicación en el Periódico Oficial, del decreto correspondiente**“(Énfasis añadido)*

De una interpretación sistemática de los artículos transcritos, se desprende primeramente que el registro contable del efecto patrimonial y presupuestal de las operaciones financieras se realizará conforme al sistema y a las disposiciones que se aprueben en materia de planeación, programación, presupuestación, evaluación y contabilidad gubernamental.

Al respecto, si bien es cierto que el Código Financiero del Estado de México y Municipios establece la obligación de los organismos para llevar los registros contables y presupuestales; también lo es que, dicho ordenamiento jurídico no establece que debemos entender por registro contable y presupuestal; sin embargo, el “Glosario de Términos Administrativos”, emitido por el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. y el “Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación en la Administración Pública”, elaborado por el Grupo de Trabajo de Sistemas de Información Financiera, Contable y Presupuestal de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) señalan las siguientes definiciones de las palabras registro contable y registro presupuestario:

***“REGISTRO CONTABLE***

*Asiento que se realiza en los libros de contabilidad de las actividades relacionadas con el ingreso y egresos de un ente económico.”*

***“REGISTRO PRESUPUESTARIO***

*Asiento contable de las erogaciones realizadas por las dependencias y entidades con relación a la asignación, modificación y ejercicio de los recursos presupuestarios que se les hayan autorizado.”*

Por otra parte, se establece que el sistema de contabilidad sobre base acumulativa total se sustentará en los principios de contabilidad gubernamental.

Correlativo a lo anterior, es preciso referir una definición de *póliza contable*, la cual, primeramente, no está definida en el Código Financiero del Estado de México y Municipios; no obstante, los ya mencionados Glosarios la definen como:

*“****PÓLIZA CONTABLE***

*Documento en el cual se asientan en forma individual todas y cada una de las operaciones desarrolladas por una institución, así como la información necesaria para la identificación de dichas operaciones.”*

Así, se advierte que la *póliza contable* constituye un registro contable y presupuestal con el que cuentan los Municipios para el registro de sus operaciones relacionadas con sus ingresos y egresos y se anexan los documentos o comprobantes que justifiquen las anotaciones y cantidades en ellas registradas, lo que permite la identificación plena de dichas operaciones.

En este sentido, existen diversos tipos de pólizas contables de acuerdo a las operaciones realizadas, dentro de las cuales, encontramos las llamadas *pólizas de egresos*, son aquellas en las cuales se anotan diariamente las operaciones que representan gastos, es decir, salidas de dinero para el **Sujeto Obligado**, las que, además, deben encontrarse acompañadas de las documentales que sirven de soporte de dicho movimiento.

Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente ordenar la entrega de documentos donde consten los gastos comprobados del 01 de enero al 21 de enero de 2025.

Continuando con nuestro estudio, tocaremos los siguientes puntos:

***2.*** *Cuáles son sus actividades conforme a los lineamientos legales establecidos y cuales desarrolla.*

***4.*** *En medio digital copia de los proyectos o iniciativas que ha realizado o propuesto en cabildo en toda esta administración 2022-2024.*

***5.*** *En medio digital copia de los proyectos o iniciativas que ha realizado o propuesto en cabildo en toda esta administración 2025.*

***6.*** *Los logros más relevantes en la presente administración.*

Traeremos a colación el Bando Municipal del Municipio de Toluca, mediante el cual, establece que, dicho ordenamiento puede ser reformado, adicionado o abrogado en cualquier momento conforme a los criterios establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y para ello se requiere del voto aprobatorio de la mayoría de las y los integrantes del Ayuntamiento.

**La iniciativa de modificación al Bando Municipal** podrá ejercerse por:

1. La o el Presidente Municipal;
2. Las y los Síndicos y las y los Regidores;
3. Personas servidoras públicas municipales;
4. Las Autoridades Auxiliares y los Consejos de Participación Ciudadana; y
5. La ciudadanía del municipio.

Así como, serán sujetos a aprobación de los integrantes del Ayuntamiento en sesión de Cabildo mediante votación nominal invariablemente cuando se trate del Plan de Desarrollo Municipal, el presupuesto de egresos, **las iniciativas de Ley**, el Código Reglamentario y sus reformas y las demás disposiciones normativas de observancia general, así como de todos aquellos asuntos que así lo solicite cualquiera de los integrantes del Ayuntamiento que se encuentre presente.

Asimismo, traeremos de nueva cuenta el Código Reglamentario Municipal de Toluca, en el cual, indica que, el **Plan de Desarrollo Municipal**, es el documento rector del desarrollo socio-económico del municipio de mayor rango en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, **que para su ejecución se desglosa a través de programas y proyectos**; adicionalmente, el **artículo 3.30.**, establece que, la o el titular de la Dirección de Gobernanza, entre sus atribuciones, cuenta con la de **generar proyectos para la solución de problemas sociales mediante alianzas entre el gobierno municipal con los sectores académico y/o empresarial**.

Por lo anterior es que, a juicio de este Instituto, con la entrega de este informe, el particular podrá advertir las actividades, proyectos y logros obtenidos durante tales años.

Ahora bien, por cuanto hace a iniciativas presentadas al cabildo en la administración 2022-2024, así como del 2025, se tiene que el **Sujeto Obligado** no puntualizó si cuenta con dicha información o no, por consiguiente, se colige que no observó lo que dispone el Criterio 02/2017 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se establece que:

***“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.*** *De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.”*

Es así, que los sujetos obligados para garantizar el derecho de acceso a la Información, deberán cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia, esto es, que la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, mientras que la exhaustividad establece que el sujeto obligado deberá atender de manera expresa cada uno de los puntos solicitados, situación que en el presente caso **no aconteció**, pues el **Sujeto Obligado** no fue congruente en proporcionar la información que requirió específicamente la parte **Recurrente**, por ello se determina ordenar la entrega de los proyectos o iniciativas que ha realizado o propuesto en cabildo en toda esta administración 2022-2024, para el caso de que derivado de la búsqueda que se ordena no se llegara a localizar información, **en virtud de que no presentó propuesta alguna, asimismo para el caso de que no cuente con documentos que den cuenta de los logros relevantes de la Presidencia Municipal, del 01 al 21 de enero de 2025**, bastará con que así se haga del conocimiento de la persona solicitante para tener por satisfecho del derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 19, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En relación al numeral ***8)*** ***Las actividades de cada uno de los servidores públicos asignados a la Décima Regiduría***, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece lo siguiente:

***De los Regidores***

***Artículo 55.-*** *Son atribuciones de los regidores, las siguientes:*

*I. Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el ayuntamiento;*

*II. Suplir al presidente municipal en sus faltas temporales, en los términos establecidos por este ordenamiento;*

*III. Vigilar y atender el sector de la administración municipal que les sea encomendado por el ayuntamiento;*

*IV. Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el ayuntamiento y aquéllas que le designe en forma concreta el presidente municipal;*

*V. Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores de la administración municipal;*

*VI. Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y apruebe el ayuntamiento;*

*VII. Firmar las Actas de Cabildo, y*

*VIII. Las demás que les otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.*

Así las cosas, de una revisión al marco normativo aplicable al **Sujeto Obligado** y, al requerir en estricto sentido, las actividades de servidores públicos adscritos a una unidad administrativa de la administración pública municipal como lo es, la décima regiduría, en consecuencia, le concierne exclusivamente al Ayuntamiento de Toluca, es dable ordenar la entrega del o los documentos en donde consten las actividades del personal adscrito a la Décima Regiduría.

Tocante a la información relativa a comisiones, es importante señalar que, el artículo 64 y 65, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de México, establece que los Ayuntamientos, para el eficaz desempeño de sus funciones públicas, se auxiliará de Comisiones, Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones Sociales, de los cuales se menciona los siguiente:

* Las comisiones del ayuntamiento serán responsables de estudiar, examinar y proponer a éste los acuerdos, acciones o normas tendientes a mejorar la administración pública municipal, la solución de los litigios laborales en su contra, así como de vigilar e informar sobre los asuntos a su cargo y sobre el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que dicte el cabildo, los integrantes de **las comisiones del ayuntamiento serán nombrados por éste, de entre sus miembros, a propuesta del presidente municipal,** **a más tardar en la tercera sesión ordinaria que celebren al inicio de su gestión, las comisiones, deberán entregar al ayuntamiento, en sesión ordinaria, un informe trimestral que permita conocer y transparentar el desarrollo de sus actividades, trabajo y gestiones realizadas.**
* **Una vez nombrados los integrantes de las comisiones, los presidentes de cada una tendrán treinta días para convocar a sesión a efecto de llevar a cabo su instalación e inicio de los trabajos.**
* Los Consejos de Participación Ciudadana, tendrán dentro sus atribuciones la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales en las diversas materias, **se integrará hasta con cinco personas vecinas del municipio mediante convocatoria que deberá aprobar y publicar el ayuntamiento en los lugares más visibles y concurridos de cada comunidad, cuando menos quince días antes de la elección y el ayuntamiento expedirá los nombramientos respectivos firmados.**

Las organizaciones sociales se integrarán con los habitantes del municipio, por designación de ellos mismos, y sus actividades serán transitorias o permanentes, conforme al programa o proyecto de interés común en el que acuerden participar.

Asimismo, el **Código Reglamentario Municipal de Toluca**, establece que, para el eficaz desempeño de sus funciones, el Ayuntamiento se auxiliará de comisiones, que serán permanentes o transitorias.

La integración de las comisiones permanentes se hará a más tardar en la tercera sesión

ordinaria de Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal y se conformarán de la

siguiente manera:

I. Una o un Presidente;

II. Una o un Secretario; y

III. Tres vocales.

Las comisiones transitorias se integrarán, cuando haya necesidad de constituirlas para la atención de problemas especiales, situaciones emergentes o eventuales, y su duración se ajustará al tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto y tendrán como miembros:

I. Una o un Presidente;

II. Una o un Secretario;

III. Tres vocales; y

IV. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Dependencia Municipal que tenga relación con el asunto que motivó a la integración de la comisión.

Las comisiones se conformarán de forma plural y proporcional, tomando en cuenta el

número de sus integrantes y la importancia de los ramos encomendados a las mismas; adicionalmente, el artículo 5.15, de la normatividad descrita con anterioridad, establece lo siguiente:

***Artículo 5.15.*** *Por cada sesión celebrada la o el Secretario levantará el acta correspondiente, para dar fe y legalidad a la misma y será firmada por los integrantes que hayan asistido, la cual contendrá los siguientes datos:*

*I. Número de acta incluyendo las siglas del órgano colegiado, la palabra acta, la*

*fecha y el número que deberá ser consecutivo;*

*II. Lugar en donde se efectuó la sesión de trabajo;*

*III. Hora, día, mes y año de la celebración de la sesión;*

*IV. Nombre y cargo de los asistentes a la sesión;*

*V. Puntos del orden del día en la secuencia que fueron tratados;*

*VI. Propuestas que surjan del debate;*

*VII. Resultados de votación anotando la propuesta que haya obtenido la mayor*

*votación y así sucesivamente;*

*VIII. Acuerdos y compromisos tomados, así como los responsables de su ejecución;*

*IX. Hora, día, mes y año de haberse declarado concluida la sesión; y*

*X. Firma de asistentes.*

Asimismo, dicho ordenamiento indica que, en el municipio de Toluca se establecerán aquellos órganos colegiados cuya creación se ordene en alguna Ley, Código o Reglamento y su estructura y funcionamiento se sujetará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico respectivo y se integrarán e instalarán, de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes órganos colegiados:

*I. Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal;*

*II. Comisión Municipal de Mejora Regulatoria;*

*III. Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible;*

*IV. Consejo Municipal para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad;*

*V. Consejo Municipal Forestal y Vegetal;*

*VI. Consejo Consultivo Municipal de Turismo;*

*VII. Comité de Adquisiciones y Servicios;*

*VIII. Comité de Arrendamientos y Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del Municipio de Toluca;*

*IX. Comité de Transparencia del Municipio de Toluca;*

*X. Consejo Municipal de Protección Civil;*

*XI. Comité de Bienes Muebles e Inmuebles;*

*XII. Comité Municipal de Dictámenes de Giro;*

*XIII. Consejo Municipal de participación Social en la Educación;*

*XIV. Consejo Municipal de Control y Bienestar Animal;*

*XV. Consejo Municipal para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030;*

*XVI. Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable; y*

*XVII. Los demás que ordene la legislación vigente.*

Por lo anteriormente expuesto es que se acredita que toda vez que la pretensión del particular versa en estricto sentido sobre comisiones, en las cuales se advierte que el Presidente Municipal del **Sujeto Obligado** sea parte, resulta pertinente ordenar entrega de documental en donde conste dicha situación.

Finalmente, no pasa por desapercibido que la parte **Recurrente** requirió la información indicada en “**copia**”, en este sentido, lo idóneo es ordenar la entrega de la información, a través del **SAIMEX**, puesto que, al ser un documento electrónico o digitalizado, cuentan con la característica de ser descargable a cualquier equipo de cómputo para la libre manipulación de los Particulares, es decir, si la información se encuentra en documentos electrónicos, estos se pueden descargar de manera fácil y sencilla a un equipo de cómputo para que, posteriormente por cuenta de la persona solicitante, sea transferido a los dispositivos de almacenamiento que desee, o en su caso, **sea impreso, lo que se configura como copia simple**; de lo anterior, tenemos que, al ser entregado de forma digital o electrónica a través del **SAIMEX**, como es el caso, la hoy parte **Recurrente** puede hacer uso de la información a su libre elección.

Bajo ese contexto, se considera que, con el pronunciamiento realizado en la etapa de manifestaciones por el **Sujeto Obligado**, no colma con la información solicitada por el particular; por lo que es dable la entrega de lo peticionado en la presente resolución, de conformidad con los resolutivos de la presente.

Asimismo, debemos advertir que dentro del documento o documentos en los que conste la información que se ordena, puede obrar información que por su naturaleza sea clasificada, se debe atender al siguiente considerando:

1. ***DE LA VERSIÓN PÚBLICA.***

En la elaboración de la versión pública se deberá considera lo dispuesto en los artículos 3 fracciones IX, XX, XXI y XLV, 91 y 132 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establecen:

***Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*[…]*

***IX. Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX.******Información clasificada:*** *Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI.******Información confidencial:*** *Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***…***

***XLV.******Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

*[…]*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

*[…]*

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares.

Asimismo, el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren confidenciales, serán una limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:

1. Se trate de datos personales o información privada; esto es, información concerniente a una persona física o jurídico colectiva y que esta sea identificada o identificable.
2. Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3°, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación el diverso 4°, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se advierte que son datos personales, la información concerniente a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable (cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico), establecida en cualquier formato o modalidad. Bajo ese contexto, se analizarán si los datos mencionados de manera enunciativa son confidenciales o públicos.

* **Nombre de particulares**

Al respecto, se considera que el nombre se integra con el sustantivo propio y el primer apellido de los padres, en el orden que, de común acuerdo determinen; asimismo es la manifestación principal del derecho subjetivo a la personalidad y atributo de esta en términos del artículo 2.3 del Código Civil del Estado de México, de tal suerte, el nombre *per se* es un elemento que hace a una persona física identificada o identificable, por lo que, **se considera un dato personal.**

Al respecto cabe señalar lo previsto en la tesis aislada número 1a. CCXIV/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, de diciembre de 2009, página 277, de la Novena Época, materia constitucional, que establece lo siguiente:

*“****DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA.*** *La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo ‘privado’. Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural.* ***Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-.*** *A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento.* ***En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás****, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.”*

De conformidad con lo señalado, se colige que **las actividades que realicen los particulares, dentro del ámbito privado, o dentro de la esfera particular, es información que debe protegerse.**

En consecuencia, se estima que resulta procedente la clasificación del nombre de particulares en actuación dentro de su ámbito privado, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Correo electrónico particular**

El correo electrónico es un sistema de transmisión de mensajes por computadora a través de redes informáticas. Dicho dato se puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuya nomenclatura, se considera como un dato personal, toda vez que es un medio para comunicarse con la persona titular del mismo, la hace localizable e incluso identificable, al poder estar conformado por parte de su nombre o bien, fecha de nacimiento.

En ese sentido, cabe señalar que el correo electrónico que corresponda a una persona física y no así en calidad de trabajador del Gobierno, como servidor público; por lo que corresponde a un dato personal que actualiza la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Teléfono particular**

Al igual que el correo electrónico, el número asignado a un teléfono particular o celular permite localizar a una persona física identificada o identificable, ya sea a través de un dispositivo móvil o bien, en un lugar como el domicilio; por lo que, dicho dato personal es susceptible de ser clasificado como confidencial, con fundamento en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Ahora bien, es de señalar que el **Sujeto Obligado** clasificó los teléfonos de servidores públicos, sin mencionar que eran institucionales o personales, por lo que, en el segundo caso, procedería la clasificación, como se mencionó en el párrafo anterior; sin embargo, para el caso de que sea institucional, en necesario traer a colación, los artículos 70, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación el 92, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, que precisan que el número telefónico institucional de servidores públicos, guarda dicha naturaleza.

Así, para el caso de que los números correspondan al institucional de servidores públicos, deberá proporcionarlos, al no actualizar la causal de clasificación, prevista, en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Domicilio particular**

De acuerdo a lo señalado en los artículos 2.3 y 2.5 del Código Civil del Estado de México, el domicilio es un atributo de la personalidad y un derecho de las personas; además que tiene como propósito que una persona pueda establecerse temporal o permanentemente en un lugar determinado, para habitar, establecer su centro de trabajo o negocios.

De la misma manera, lo establece el artículo 29 del Código Civil Federal, al precisar que el domicilio de personas físicas**, es el lugar donde residen habitualmente, el lugar del centro principal de sus negocios, donde residan o el lugar donde se encuentren.**

En ese contexto, la dirección o domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que, permite hacerlo identificable y ubicable, propiciando que pueda ser molestado en su casa o negocio, de este modo, los datos que permiten a cualquier individuo con esfuerzos mínimos identificar el lugar de residencia o de trabajo constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas. Por lo tanto, se actualiza la clasificación, de conformidad con la fracción I, del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Firma** **de particulares**

En principio, cabe señalar que la firma corresponde de aquellas personas físicas que fueron a solicitar un trámite o servicio al Sujeto Obligado, por lo que, no se trata de empleados o servidores públicos de este, sino de particulares.

En ese contexto, la firma es considerada un dato personal, al tratarse de información gráfica a través de la cual su titular exterioriza su voluntad en actos públicos y privados; por lo que, al tratarse de un dato concerniente a una persona física, es considerada confidencial, ya que también haría identificable a los individuos en cuestión.

Además, es un dato que exterioriza su voluntad para solicitar un trámite o servicio al Sujeto Obligado; por lo que, se actualiza la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Nombre de representante legal**

Al respecto, resulta necesario señalar que las personas morales son representadas mediante personas físicas, debidamente acreditadas para realizar determinados actos a nombre de la jurídico-colectiva, por lo que, el nombre de dichos individuos no puede ser objeto de clasificación, en virtud de que la representación persigue la finalidad de dar certeza jurídica a los actos que realiza, en el presente caso, solicitar, aceptar y recibir una autorización para ocupar vialidades para carga y descarga de mercancía o insumos para una unidad económica.

En ese sentido, el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quiénes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad; por lo que, para que surtan efectos los poderes que otorgue dicha empresa bastará su protocolización ante notario público.

En esa tesitura, la representación de las personas morales se realizará por medio de representantes o apoderados, y en el caso específico de las sociedades mercantiles, dicha representación se otorgará mediante instrumento público.

Ello, toda vez que la representación legal debe ser conocida para surtir efectos ante terceros; es decir, la publicidad de la misma tiene por objeto dar certeza a quienes se relacionan con la persona jurídico colectiva representada, que las actuaciones de su representante están previamente autorizadas y que surtirán efectos legales a que constriñe cada acto.

En ese orden de ideas, se estima que si bien, el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace una persona física identificada o identificable; lo cierto es que el nombre del apoderado legal de una empresa, **es público,** toda vez que por conducto de este, una persona jurídico-colectiva realiza cualquier acto jurídico; es decir, la publicidad de dicho dato da certeza a quienes se relacionan con la persona representada, partiendo del supuesto de que las actuaciones de su representante están previamente autorizadas y que surtirán los efectos legales a que se constriñe en cada acto.

Lo anterior, se robustece con el Criterio de Interpretación, de la Segunda Época, con clave de control SO/001/2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece que el nombre del representante legal, de una persona jurídica colectiva a la cual se le emitió autorización para uso de vialidades, no es susceptible de ser clasificado como confidencial, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

* **Firma del titular o representante legal.**

Al respecto, es de señalar que la firma es considerada un dato personal, al tratarse de información gráfica a través de la cual su titular exterioriza su voluntad en actos públicos y privados; en el presente caso, dicho dato, es del representante legal o titular de la licencia o permiso de funcionamiento.

Además, en el presente caso, dicho dato es plasmado en las autorizaciones señaladas, dado que con este se acredita que fue entregado por el Municipio al titular o representante legal de la empresa que realzará una actividad económica, comercial o industrial; por lo que, guarda cierto interés público dar a conocer la firma, dado que cualquier actividad, es regulada por el Municipio de Ixtapan de la Sal dentro de su circunscripción territorial, pues ayuda a transparentar la gestión pública.

Además, otorgar la firma de la persona autorizada, a través de una licencia, permiso o autorización, permite corroborar que la exhibida en el establecimiento comercial, fue emitida efectivamente por la autoridad competente, en el presente caso, por el Ente Recurrido y **aceptada por el titular, al rubricarla.**

Así, mediante la difusión de las firmas de aquellas personas que cuentan con la licencia o permiso, permitiría una debida rendición de cuentas, pues es indispensable que se conozcan aquellos que están autorizados por parte del Municipio de Ixtapan de la Sal para realizar actividades económicas, mismas que se encuentran reguladas, por lo que, con ello se garantizaría que la sociedad tenga certeza de que **las autorizaciones colocadas en los establecimientos, puestos, tianguis o mercados, fueron efectivamente emitidos por el Sujeto Obligado y aceptadas, por el Titular de estas, y no funcionan fuera del marco de la normatividad aplicable.**

Conforme a lo expuesto, se considera que la firma de los representantes legales o titulares, solicitantes de autorización para ocupar vialidades para carga y descarga, no actualizan la causal de clasificación, establecida en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Número de empleado.**

El número de empleado es un identificador único que se asigna a cada trabajador por parte de su empleador. Este número se utiliza para llevar un registro de todas las actividades y relaciones laborales de cada empleado, así como para realizar trámites y gestiones de carácter oficial3. En México, el número de empleado es un identificador único que se asigna a cada trabajador por parte de su empleador.

Visto lo anterior, se concluye que dicho dato no es susceptible de testar, **al menos que, el número de empleado arroje datos personales**; por lo que, en el segundo caso, procedería la **clasificación**. Así, para el caso de que los números de empleado no arrojen datos personales de los servidores públicos inmersos en los oficios remitidos, , deberá proporcionarlos, al no actualizar la causal de clasificación, prevista, en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia que la sustente el cual debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al **Sujeto Obligado** a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, se reitera que lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

Por lo que respecta al Acuerdo del Comité de Transparencia que la sustente la versión pública, de la documentación a entregar, deberá ser notificado mediante el SAIMEX.

En ese tenor y de acuerdo a la interpretación en el orden administrativo que le da la Ley de la materia a este Instituto específicamente, en términos de su artículo 36, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a efecto de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública consignado a favor del **Recurrente**.

* **De la vista a los órganos de control interno competentes.**

Como ya se mencionó el **Sujeto Obligado**, no proporcionó respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, en el término previsto en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por lo que ordena dar vistaa la Secretaría Técnica del Pleno de este Instituto para hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control competente la presente resolución, a fin de que de conformidad con los artículos 190 y 222 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y 19 fracción XXVII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, se determine lo conducente.

Por lo tanto, en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, con fundamento en la fracción IV, del artículo 186, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **ORDENA** al **Sujeto Obligado**, atienda la solicitud de información número **00424/TOLUCA/IP/2025**, que ha sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y;

**S E R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente,** en términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO**. Se**ORDENA**al **Sujeto Obligado**, atienda la solicitud de información número **00424/TOLUCA/IP/2025**,en términos del Considerando **QUINTO** de esta resolución, vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)** y previa búsqueda exhaustiva y razonable, haga entrega, de ser procedente la versión pública, del o los documentos en donde conste la siguiente información:

1. Los documentos donde conste la cantidad gastada en publicidad o contratación de difusión de temas de competencia de la Presidencia Municipal de Toluca, del uno de enero del dos mil dieciocho al veintiuno de enero de dos mil veinticinco.
2. El o los documentos en donde consten las actividades desarrollas por parte del Presidente Municipal, vigente al veintiuno de enero de dos mil veinticinco.
3. El o los documentos donde conste la comprobación de gastos del Presidente Municipal, del periodo comprendido del uno al veintiuno de enero de dos mil veinticinco.
4. El o los documentos en donde consten las comisiones que preside y en las que participa el Presidente Municipal, vigente al veintiuno de enero de dos mil veinticinco.
5. Los proyectos o iniciativas que la Presidencia Municipal propuso al cabildo del periodo comprendido del uno al veintiuno de enero de dos mil veinticinco.
6. El o los documentos en donde consten las actividades y logros relevantes de la Presidencia Municipal, del periodo comprendido del uno al veintiuno de enero de dos mil veinticinco.
7. El o los documentos en donde consten las actividades de los servidores públicos adscritos a la Décima Regiduría, vigente al veintiuno de enero de dos mil veinticinco.

*Para la entrega en versión pública, deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen y se ponga a disposición del* ***Recurrente****.*

*Para el caso de que la información que se ordena entregar en el* ***numeral 5)*** *no obre en los archivos del* ***Sujeto Obligado*** *al no haber enviado proyectos o iniciativas al cabildo, en la temporalidad que se ordena; respecto al* ***numeral 6)****, en virtud de que no cuente con documentos que den cuenta de los logros relevantes de la Presidencia Municipal, del* ***uno al veintiuno de enero de 2025*** *y tocante al* ***numeral 7)****, por no haberse generado la información solicitada; este deberá hacerlo del conocimiento de* ***la parte******Recurrente*** *en términos del artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, para tenerse por colmado dicho requerimiento.*

**TERCERO**. **NOTIFÍQUESE**, vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

**CUARTO**. **NOTIFÍQUESE**, vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)** a la parte **Recurrente** la presente resolución; así mismo, hágase de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de considerar que le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

**QUINTO**. Se hace del conocimiento de la parte **Recurrente** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 179, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, tiene derecho a interponer nuevamente Recurso de Revisión ante este Instituto, por la respuesta que proporcione el Sujeto Obligado, en cumplimiento a esta Resolución.

**SEXTO**. **GÍRESE** oficio a la Secretaría Técnica del Pleno de este Instituto para hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control competente la presente resolución, a fin de que de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se determine lo conducente, en términos de lo señalado en el Considerand**o** **QUINTO** de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA DÉCIMA SEGUNDA ORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JMV/CCR/jasm

1. ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

   *Del examen de compatibilidad de los artículos*[*73 y 74 de la Ley de Amparo*](javascript:AbrirModal(1))*con el artículo*[*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](javascript:AbrirModal(2))***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *https://www2.toluca.gob.mx/wp-content/uploads/2024/04/Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Clasificacio%CC%81n-por-Objeto-del-Gasto.pdf* [↑](#footnote-ref-2)